

El Salvador proceso

informativo semanal

Año 17
número 739

diciembre 18
1996
ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- 1996: un año de transformaciones postergadas**
- Balance político**
- Balance económico**
- Balance socio-laboral**
- Balance regional**
- La opinión pública en 1996: los problemas nacionales y la crisis institucional**
- Los derechos humanos en 1996**
- Cronología de 1996**

La opinión pública en 1996: los problemas nacionales y la crisis institucional

En términos de pensamiento social y de opinión pública, hay que decir que 1996 se destacó en tres áreas, dos de ellas por su predominio generalizado en la opinión ciudadana y una de ellas por su casi ausencia de la consideración pública —al menos a nivel del salvadoreño común. Así, los dos temas que dominaron la agenda salvadoreña durante 1996 son los ya clásicos problemas de violencia y economía. De hecho, estas cuestiones no son privativas del período que acaba de terminar sino que, dadas las condiciones en que se ha desarrollado el país desde la firma de los Acuerdos de paz, vienen estando presentes en la conciencia salvadoreña por largo tiempo. Lo que caracterizó 1996 fue más bien un aumento en la percepción de tales problemas, dejando poco espacio para la consideración de otras problemáticas nacionales —probablemente no menos importantes—, y mucho menos para el interés de la dinámica política salvadoreña, aún a pesar de que 1996 constituía un año pre-eleitoral. Este constituye el otro lado de la moneda, en el sentido de que la mayoría de los ciudadanos no parecieron interesarse en absoluto por la política, lo cual ha tenido efectos especialmente contundentes en el nivel de apoyo de la población a sus instituciones políticas y hacia su gobierno.

En todo caso, durante el último año bisiesto del milenio, los salvadoreños estuvieron más preocupados por la capacidad económica de su bolsa que, a juicio de la población y contrario a las versiones gubernamentales, pareció disminuir; a la vez que estuvieron asustados a causa de una creciente percepción sobre la violencia delincinencial en la sociedad urbana y rural salvadoreña. Estas circunstancias no sólo

mantuvieron alejada la atención de los ciudadanos de la dinámica política del país sino que contribuyeron a profundizar un peligroso desdén por la institucionalidad política, la cual alcanzó el nivel más bajo de simpatía popular de la postguerra y probablemente de la historia moderna de El Salvador.

La violencia delincinencial

El porcentaje de salvadoreños que identificó la delincinencia o alguna de sus manifestaciones como el principal problema del país, alcanzó casi el 65 por ciento en 1996, esto es, dos de cada tres ciudadanos señalaron al crimen de manera espontánea como la principal dificultad nacional (ver Proceso 710). Esta constituye la más alta proporción de respuestas asignadas a la delincinencia en la historia los sondeos de opinión pública del IUDOP. Dicha tendencia refleja el nivel de ansiedad que ha alcanzado la población por un problema muchas veces percibido como irresoluble. Sin embargo, el mismo sondeo de opinión cursado en el mes de mayo del año que recién finaliza señaló que la relación de familias víctimas de hechos delincinenciales habría disminuido en comparación con mediciones hechas en años anteriores. Efectivamente, el 26.4 por ciento de las familias consultadas a mediados de 1996 dijo haber sido víctima del crimen en comparación con el 35 por ciento promedio obtenido en años pasados. Estos resultados sugieren que— sin dejar de ser un problema grave —lo que ha crecido para 1996 no es la delincinencia en sí misma sino más bien la percepción que los salvadoreños tienen de ella como problema. Aunque no se puede negar que la violencia en este año adoptó modalidades terribles en la recurrencia a las masacres de grupos fami-

liares enteros (una forma que recuerda a los operativos bélicos) y en los enfrentamientos callejeros de jóvenes pandilleros, el cambio fundamental en la dinámica de violencia de este año parece haberse dado más a nivel cualitativo que en un aumento de la misma a nivel cuantitativo.

En tal sentido, en el aumento de la percepción de la violencia criminal como problema compartido durante 1996 estarían actuando otros factores más allá de la simple prevalencia del fenómeno. Y es que el año en cuestión fue un período especialmente fértil para cierto tipo de periodismo nacional que encontró en la crónica roja un campo muy productivo en la tarea de atraer a las masas, ya asustadas por las condiciones de inseguridad ciudadana.

A pesar de que la criminalidad comenzó a ser señalada como un asunto de preocupación nacional por los salvadoreños justo desde la firma de la paz, parece que los medios de comunicación no repararon en la misma sino hasta hace un par de años, luego de que la agenda política perdió rentabilidad en términos de audiencia noticiosa. En 1996, la página roja ocupó la titularidad de la mayor parte de noticieros y publicaciones informativas del país, muchas veces exacerbando la noticia y añadiendo un morbo sensacionalista que inclusive estuvo ausente en la noticias durante la guerra. Un análisis de las encuestas realizado a mediados del año sobre la influencia de la prensa en la opinión pública mostró, a diferencia de otros temas, que los periódicos y los noticieros de televisión influyen directamente en la percepción que tienen los salvadoreños sobre la gravedad del problema delincinencial. En otras palabras, entre más atención se preste a las noticias, la percepción sobre la violencia delincinencial será mayor. Esto implica que mucha de la ansiedad que predominó en la opinión pública salvadoreña en 1996 ciertamente ha estado fundamentada sobre una base real, pero ha sido aumentada hasta niveles de casi desesperación gracias al de-

cidido y constante ejercicio de la prensa.

En esta campaña de alarma toma parte también la administración gubernamental. Frente al problema del crimen, 1996 se caracteriza por ser el año en que el gobierno lleva a cabo una cruzada antidelincinencial subrayando la gravedad del problema en una sucesión de medidas —la mayor parte descoordinadas entre sí—, que inicia con la campaña para aprobar la Ley de Emergencia contra la Delincinencia y el Crimen Organizado y termina con la aprobación del primer paso para reinstalar la pena de muerte en el país; medidas que al final sólo consiguen dar la impresión a la ciudadanía de que el problema de la violencia no tiene solución. Las disposiciones para combatir la delincinencia se toman apelando al “clamor popular”, el cual ciertamente es masivo pero superficial. La mayoría de los salvadoreños estuvo de acuerdo con la promulgación de las medidas para combatir el crimen pero no todos esperaban que las mismas fueran efectivas para contrarrestar el problema; ello indicaba que muchos ciudadanos se sentían en la obligación de apoyar cualquier cosa que se presentara como alternativa para detener la agobiante ola criminal aunque no estuvieran seguros de su eficacia. Al apoyo de tales medidas, sin duda, contribuyeron también hechos que impactaron en la opinión pública: el secuestro del joven Súster, la aplicación de la pena capital para dos condenados en Guatemala, las repetidas masacres de familias, etcétera. El mismo paro de labores en Usulután como protesta por los niveles de delincinencia fue un suceso que surge de la ciudadanía. Todos estos hechos fueron hábilmente manejados por las autoridades para justificar la promulgación de las medidas antidelincinenciales.

Sin embargo, la ausencia de un plan maestro para combatir la violencia que integre, dé sentido y metas claras a las políticas del gobierno y la dependencia de la conciencia pública de la prensa, provocó que al final

del año 1996 fuese percibido como un período perdido en la lucha contra la delincuencia, aunque probablemente la tasa de homicidios baja en 1996. De hecho, en el sondeo de evaluación anual, más del 80 por ciento de los salvadoreños afirmó que la violencia delincriminal había aumentado en 1996; además, la misma investigación reveló que un porcentaje importante de la ciudadanía considera el mantenimiento del crimen como uno de los principales fracasos del actual gobierno.

Estas percepciones sobre la situación de criminalidad en El Salvador no sólo tuvieron repercusiones sobre los sentimientos compartidos de inseguridad pública, sino también alentaron, mantuvieron y justificaron en ciertos sectores de la población, actitudes en contra de la institucionalidad del país. Actitudes que mucha gente piensa que son cosa del pasado en virtud del proceso sociopolítico por el que ha atravesado la nación, pero parecen haberse revitalizado en la dinámica social del 96.

La ansiedad por la percepción de una escalada sin freno de la violencia delincriminal y la sensación de un agotamiento de los recursos convencionales para hacerle frente han provocado que muchos ciudadanos en 1996 acentúan sus convicciones de que las formas institucionales no son útiles para resolver los problemas. En un sondeo cursado en agosto de 1996, casi la mitad de los consultados estuvo de acuerdo con que "la gente tiene el derecho a tomar la justicia por su propia mano" cuando el gobierno no proporciona justicia y seguridad; es más, otros resultados de la misma encuesta señalaron que más de un 40 por ciento de los salvadoreños desobedecería una ley con la cual no está de acuerdo y resolvería sus problemas antes que esperar por soluciones legales (ver ECA, 576). En este sentido, hay razones para pensar que al terminar 1996, frente a la percepción de la inoperancia de las instituciones para resolver uno de los problemas más graves, cada vez hay más

ciudadanos tentados a pasar por alto las normas de la precaria institucionalidad salvadoreña.

Estos datos no sólo ilustran unas posturas que parecen haber crecido en el año que recién termina, sino también ayudan a explicar las dificultades que ha encontrado el gobierno para someter a ciertos sectores e impartir justicia en otras áreas en su intento por imponer cierto nivel de orden urbano y social.

La economía

La visión de la economía salvadoreña como un problema grave es un producto exclusivo de la opinión popular; algo que definitivamente no es compartido por el gobierno. Si algo caracterizó a 1996 es la creciente y profunda brecha de contradicción entre el discurso gubernamental y la opinión popular sobre la economía del país. Mientras la administración de Calderón Sol utilizaba sus mejores recursos para presentar las posibilidades del "milagro económico" salvadoreño, los ciudadanos señalaban con más intensidad la gravedad del problema financiero en los aspectos de inflación, desempleo y pobreza, como su principal preocupación sólo después de la delincuencia. En un sondeo cursado a mediados de 1996 para evaluar la gestión del gobierno después de dos años de trabajo, el 61 por ciento de los consultados afirmó que la situación del país había empeorado con la gestión gubernamental; y el 40 por ciento identificó aspectos de índole económico entre los principales fracasos del gobierno. Para finales del año, la encuesta de evaluación de 1996 reveló que más de la mitad de los salvadoreños considera que su economía familiar ha empeorado durante el período que finaliza.

Contrario a su comportamiento respecto al problema de la delincuencia, frente al cual el gobierno afirmó actuar siguiendo el clamor popular, el Ejecutivo hizo caso omiso a las constantes peticiones públicas para que revisara su política económica. Un ejemplo de

eso ha sido la política de privatización de ciertas entidades públicas. Una encuesta del IUDOP reveló en junio que sólo el 25 por ciento de la población apoyaba la privatización de las administraciones de telecomunicaciones y electricidad; en cambio, un 55 por ciento estaba en contra y un 20 por ciento no tenía una opinión al respecto.

Esta indiferencia del gobierno para someter su política económica a discusión y cambios, cuando no su triunfalismo hablando de los logros en materia financiera nacional, ha sido interpretada por la población como una señal inequívoca de que la política económica no va a modificarse sustancialmente y que su situación financiera particular probablemente empeore en el futuro. En respuesta, en 1996 muchos salvadoreños comenzaron a retirar su simpatía y lealtad de las instituciones políticas que eligieron para gobernar al país y han acrecentado el conjunto de población que se siente defraudada por el sistema político, al cual no ven capaz de resolver sus inveterados pero urgentes problemas. Quizás de manera no tan conciente, los salvadoreños han estado asumiendo el hecho de que sus políticos, de que su sistema y de que la institucionalidad existente, no son muy útiles para consolidar un proyecto nacional que realmente resuelva los grandes problemas nacionales y lleve al país al tan ansiado desarrollo; esto porque las decisiones no dependen siquiera de quienes ellos escogieron para gobernarlos sino de sectores o fuerzas que no terminan de estar claras a los ojos de la población. Todo ello lleva a la desconfianza en la mayoría de las instituciones nacionales. En estas circunstancias, para muchos ciudadanos más vale asegurar los intereses propios e inmediatos y desatenderse de los proyectos nacionales que hacer presencia en un sistema que sigue dando muestras de favorecer sólo a ciertos intereses.

La institucionalidad política

Al igual que los puntos anteriores, el fe-

nómeno de desconfianza en las instituciones del país y el desinterés ciudadano por la dinámica política del país, no son aspectos que hayan aparecido precisamente en el año que termina. Más bien, la particularidad de 1996 es que durante este período, las actitudes de indiferencia hacia la esfera política nacional y de escepticismo hacia las instituciones políticas y gobernantes encontraron un campo muy fértil en la conciencia del salvadoreño promedio.

Frente a la percepción de la incapacidad del sistema social, en su conjunto, para lidiar con los problemas más agobiantes que se le han venido planteando a la sociedad salvadoreña, los ciudadanos han ido convencidos —no sin mucha inquietud— de que sus instituciones políticas, sobre todo las que están más vinculadas con el statu quo son las que merecen menos credibilidad de todas. Los sondeos realizados por el IUDOP a lo largo de 1996 mostraron que la confianza en la mayoría de las instituciones salvadoreñas alcanzó los niveles más bajos en la historia de medición de la opinión pública en este país centroamericano. La presidencia, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos y la Corte Suprema de Justicia —precisamente aquéllas instituciones vinculadas con la dirección del Estado y el país— reciben los más bajos puntajes de confianza popular; mientras que entidades como la iglesia católica, los medios de comunicación, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos —instituciones no vinculadas directamente al Estado—, aunque no reciben una opinión completamente favorable, acogen un nivel de confianza mucho mayor que las instituciones oficiales. La simpatía popular, entonces, no está dirigida a las instituciones que de alguna manera representan a los ciudadanos, o que ellos eligieron para hacerlo, sino que está depositada en las entidades que, de una u otra manera, han sido vistas como más capaces de entender y ayudar a la población con sus problemáticas más básicas.

Esto ha planteado un problema muy serio de legitimidad del sistema a los ojos del ciudadano común. En la última encuesta del año, la UCA preguntó a los salvadoreños sobre el rumbo del país: cerca del 85 por ciento de los consultados dijo que el país necesita un cambio y sólo el 11 por ciento afirmó que la nación va por un buen camino. En estas condiciones, no es extraño entonces encontrar que cada vez más ciudadanos pasarían por alto las normativas sociales y los preceptos legales para solucionar sus cuestiones.

La crisis de credibilidad en las instituciones del país ha tenido también un concordante impacto en la disposición ciudadana a participar políticamente, al menos como lo dispone el sistema. El año que recién finaliza "tropezó" con el nivel más alto de indiferencia hacia los partidos políticos y hacia el proceso electoral que tomará lugar en 1997. No sólo mucha gente no quiere saber de las próximas elecciones, ni le interesa el resultado de las mismas, sino que muchos salvadoreños que durante años se han presentado como militantes muy activos de sus instituciones partidarias han comenzado a abandonarlas sin tener claro o siquiera interesarse por acudir a otro partido.

Lo anterior explica que a finalizar el año y cuatro meses antes de las elecciones legislativas y municipales, casi dos terceras partes de la población no tengan un partido político de preferencia y que, a pesar de una amplia gama de oferta partidista, sólo dos instituciones retengan las mayor parte de las intenciones de voto. Lo anterior explica también que el partido gobernante, con una amplia capacidad electoral en los últimos diez años, se encuentre a finales de 1996 tratando de mantener precariamente su ventaja, no por efecto de un crecimiento de otros

grupos partidarios, sino por un considerable desgaste como producto de su gestión al frente del gobierno.

Los salvadoreños parecen haber finalizado el año sin encontrar razones que les estimulen a participar en un sistema que, a su forma de ver y a pesar de la intensidad de los problemas nacionales, no ha sido capaz de proporcionar la seguridad ciudadana y la justicia necesarias para asegurar cierta estabilidad; que ha sido indiferente a los reclamos por cambiar una política económica que es vista como causante de la incapacidad doméstica y nacional para alcanzar mejores niveles de vida. Muchos ciudadanos quedaron convencidos en 1996 de que su sistema político no favorece a nadie más que a los políticos mismos y, por tanto, ya no están dispuestos a seguir apoyándolo. El problema es que con lo anterior se pueden crear para los períodos venideros, las condiciones para el surgimiento de alternativas de dirección nacional que, surgidas de la pretendida transición democrática y con el apoyo pasivo de la población, se conviertan en un sistema que niegue parte de los logros alcanzados con la consecución de la paz.

Muchos ciudadanos están convencidos de que el país "tocó fondo" en 1996 y se les hace difícil pensar que el estado de cosas pueda empeorar aún más en los años subsiguientes. Aunque esa visión pueda ser muy discutible, lo cierto es que tal forma de percibir la situación probablemente contribuya a que los salvadoreños decidan que es el momento de tomar el control sobre su propio destino y que lo hagan teniendo presente la historia compartida que ya no debe volver a repetirse. Todo depende de la medida en que los salvadoreños hayamos comprendido el valor de la paz con justicia y democracia.